

09



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



Entrevista

La memoria histórica, más que un deber de Estado, un derecho de la sociedad: entrevista a José Antequera

Entrevista realizada por:

Equipo Editorial Ciudad Pazando

Para citar este artículo: Revista Ciudad Pazando. (2020). La memoria histórica, más que un deber de Estado, un derecho de la sociedad: entrevista a José Antequera. *Ciudad Pazando*, 13(1), pp. 103-108.

Las metas actuales de Colombia como país, tras los Acuerdos en La Habana con el otrora grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo (FARC-EP) son claras: la reconciliación y la paz nacional. No obstante, en la consecución de estos objetivos, en un periodo denominado hoy por hoy como posacuerdo, existen muchas cuestiones irresueltas que acusan de una respuesta para permitir el tránsito colombiano a la paz. Una de ellas es la construcción y conservación de la memoria histórica, un concepto que se ha encontrado en auge académico en los últimos años, pero que, a pesar de esto, presenta diversas aristas y preguntas, entre ellas las siguientes: ¿cómo construir memoria histórica en el país?, ¿cuál es el lugar de la memoria histórica en la cotidianidad de Colombia?, incluso, ¿cuáles son las instituciones encargadas de llevar a cabo los proyectos de memoria en el territorio nacional?

Con el ánimo de abordar algunas de estas cuestiones, a continuación, se presenta una muy interesante y esclarecedora entrevista realizada a José Antequera Guzmán, abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, quien además de haber sido representante de

las víctimas en los diálogos de paz de La Habana, hoy es el director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Andrés Hernández (A. H.): Estamos muy emocionados de poder contar con su participación. Yo creo que estos espacios son necesarios para que abramos el diálogo y lo primero que quiero preguntar es, ya que usted fue un eje esencial en la creación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), ¿cómo siente ahora al ser el director y tener las riendas de la construcción de la memoria local en Colombia?

José Antequera (J. A.): Bueno, en primer lugar, obviamente es una idea que hace mucho tiempo había deseado. Me siento contento, creo que es una muy buena oportunidad. Regreso a un tema que había abandonado durante un tiempo porque consideré, en algún momento de la vida, que había trabajado suficiente y que necesitaba trabajar otros temas: la memoria histórica. Después de salir del CMPR y del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fui asesor de la autora Ángela María Robledo. Ahí trabajé temas de enfoque de género, derechos de las mujeres, economía del cuidado y eso creo que fue también un momento importante, refrescar la mente y llenar-

se de ideas nuevas. Ahora, este año ha sido una situación agri dulce, es muy chévere estar en la coordinación del CMPR y tener tantas posibilidades para hacer tantas cosas, sobre todo con el equipo con el que contamos —yo pienso que es un grandísimo equipo—, pero al mismo tiempo hacerlo en medio de una pandemia es estar limitados para hacer muchas de las cosas que quisiéramos. Sin embargo, algunas de ellas, de hecho, están teniendo mucho más impacto en términos numéricos de lo que podrían tener si fueran actividades físicas, aunque es difícil, ¿no?, tocarlo, leerlo, sentirlo. Creo que afortunadamente he trabajado suficientemente el tema de la memoria y del CMPR, eso permite que, junto con el equipo, podamos hacer las cosas bien sin necesidad de llegar a aprender, sabiendo bastante mejor que otras personas, de qué se trata esa clase de trabajo.

Arley Díaz (A. D.): Esto que acaba de mencionar es, de alguna manera, del marco laboral, pero para las personas que lleguen a leer esta entrevista es importante conocer un poco de otro tipo de elementos que permitan configurar una imagen un poco más humana. Digamos que cuando hablamos del director del CMPR, esta figura es a veces es un poco ajena a la cotidianidad. Entonces, en primera instancia, la pregunta sería: ¿quién es José Antequera Guzmán?

J. A.: Ese tipo de preguntas siempre son muy difíciles, personalmente me cuesta mucho. En primer lugar, soy hijo de una familia muy comprometida políticamente. Tanto mi padre y mi madre fueron militantes comunistas en la juventud, mi padre especialmente, quien fue dirigente del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, fue asesinado en 1989. Eso hizo que mi infancia estuviera muy marcada por esa circunstancia, aunque afortunadamente creo que haber tenido una infancia muy feliz. A partir de ahí, en el tipo de vida que escogí también elegí tener un compromiso vinculado con eso, siempre sentí que era valioso, que lo mejor que podía hacer en la vida era reivindicar esa historia, reivindicar el orgullo de sentirme identificado con ella. Así, desde pequeño, desde muy temprano, hice parte del movimiento estudiantil, del activismo político en la vida universitaria y cuando iba terminando mi carrera en Derecho hice parte de una fundación que reúne hijos de personas asesinadas, desaparecidas o que han sufrido otros hechos de violencia política. Esto, después de estudiar Derecho y luego mi maestría, significó un compromiso académico y político desde el activismo por la memoria y por la paz. Ahora, esto no resume lo que soy, obviamente es lo que he hecho en mi carrera profesional. En otros términos, también soy una persona fundamentalmente muy comprometida, que piensa todo el tiempo en cómo poder honrar mejor tanto mi historia como el compromiso actual por hacer estas cosas realidad.

En el año 2008 tuve la fortuna de conocer a Camilo González Poso, quien estaba empezando a construir el CMPR. Yo había hecho mi tesis en la universidad sobre el derecho a la memoria, eso hizo que me sintiera muy contento de poder tener la suerte, que creo es una cosa muy excepcional, de poder trabajar en algo que me gustaba, que había trabajado y pensado académicamente. Tuve la fortuna de trabajar allí cinco años construyendo el CMPR. Por supuesto que quienes lo construyeron fueron todos los obreros y obreras que trabajaron en ello, pero pude estar ahí aportando perspectivas, aprendiendo. Allí tuve una experiencia que siempre vinculé con el activismo por la paz y la militancia política por el recambio generacional en la política.

Después me vincule muy fuertemente con el proceso de paz de La Habana. En 2014 pude participar en el proceso de La Habana, en 2015 hice un programa de televisión en Canal Capital donde abordamos un poco estos temas, en 2016 me involucré en el activismo para intentar que el acuerdo no se terminara hundiéndose por esa votación del “sí” y el “no”. Trabajé en el CNMH, y con ello recorrí muchas ciudades del país y de América Latina también, conociendo proyectos de memoria, de lucha por la paz. Y bueno, después trabajé con Ángela María Robledo, como les estaba contando, con los temas de derechos de las mujeres, con enfoque de género y economía del cuidado, eso me fue involucrando más en la política. Hasta hace muy poco tiempo estaba más involucrado con el quehacer político que con la gestión de las políticas de memoria, pero afortunadamente este es un tema que conozco muy bien y esto significó la llegada al CMPR en este año. Pero bueno, ¿quién es uno?, es una pregunta que rebasa esa historia que les estoy contando. Uno siempre es muchas más cosas, ¿no?, pero se demoraría uno mucho en poder contar todo.

A. H.: Ahora, ya que usted lo mencionaba, que hablaba del recambio generacional en la política, y teniendo en cuenta el valor simbólico del CMPR para las víctimas del conflicto, ¿cuál es ese enfoque que usted, como director del lugar, quiere imprimir a los procesos que se gestan allí?

J. A.: Bueno, el esfuerzo que se realizó en la construcción del CMPR sin duda se vinculó siempre con la paz y terminó materializándose o decantándose también con el esfuerzo de un Acuerdo de Paz con las FARC, el cual se firmó en La Habana primero y luego en el Teatro Colón. Eso fue muy valioso, ¡valiosísimo! Digamos, lo que pase con el Acuerdo de Paz no elimina el hecho de que en este país, gracias a ese esfuerzo, se logró un cambio muy importante en lo que llaman algunos autores la conciencia humanitaria de la sociedad colombiana, que hizo que cuando la gente creyó que era posible que volviéramos a la guerra, esta saliera a las calles masivamente y decir: “acuerdo ya, a la guerra no volvemos nunca”. Eso no se

lo esperaba nadie debido al pasado del país y al discurso de que nos habíamos acostumbrado al conflicto. Fue muy importante también en términos de formar una conciencia para la generación de un compromiso con la no existencia del conflicto armado.

Sin embargo, a partir del 2016, el esfuerzo de memoria, en mi concepto, es un esfuerzo que tiene que definirse de alguna manera por la búsqueda, no de la paz en abstracto, no del acuerdo de paz o la defensa del acuerdo de paz pasado con las FARC, sino con el fondo o la esencia de las transformaciones que se buscan con el Acuerdo de Paz: la democratización del país. En los acuerdos de paz, lo que hay es una ventana de oportunidad para la democratización, no porque él sea la forma de silenciar los fusiles y acabar con las guerrillas simplemente. Yo creo que, sobre todo, tenemos que hablar, no de memoria para la paz, sino de memoria para la democracia. Creo que es un concepto que, además, cobra mucho valor en nuestro tiempo, considerando la crisis de la democracia liberal que vivimos en este momento. Una crisis que, por supuesto, está vinculada con el hecho de que la democracia liberal en sí misma —a parte de la crisis que tiene su ejecución— se ha permitido demasiada mercantilización de los mecanismos democráticos y la desvinculación con los derechos sociales, económicos, culturales. Pienso que tiene mucha importancia porque este año, cuando estamos viendo el 2020 y nos vemos de frente a las amenazas globales de la pandemia o el calentamiento global, creo que necesariamente tenemos que volcarnos a la discusión sobre la democracia del siglo XXI. En esto, la memoria nunca ha sido una cuestión, digamos, de mirar al pasado, siempre ha sido una reminiscencia a la experiencia histórica en función del futuro, entonces, la orientación que le queremos dar al CMPR es la de memoria para la democracia.

A. D.: Hablando de todo esto, de este giro que acaba de comentar, y dado que el acuerdo ha venido suscitado una época de tensiones y de negociaciones más allá de la firma del acuerdo, según usted, actualmente, ¿cuál es el lugar e importancia del trabajo realizado en el CMPR para la paz y la reconciliación nacional?

J. A.: Bueno, yo creo que los entes de memoria cumplen muchas labores en abstracto que en sí mismas tienen un valor. Tener un espacio que brinda políticas y ofertas alternativas para que muchas personas, instituciones, víctimas u organizaciones sociales, expresen sus consideraciones y reivindicaciones, ya tiene un valor. Si el CMPR solo fuese un lugar donde la gente puede hacer gratuitamente sus actividades, con auditorios y salas dispuestas para ello, ya tendría sentido que existiera en Bogotá. No obstante, yo creo que el plus, digamos, de la actividad que allí se realiza, más allá de hacer la gestión de un edificio, está sobre todo en formar una cultura de reivindicación democrática en nuestra sociedad. No lo quiero reducir so-

lamente a la movilización, porque cuando la gente piensa en movilización todo el mundo se imagina que es marchar y la movilización es mucho más que eso.

Ahora, la movilización es importante porque nuestra sociedad está permeada de muchos elementos nocivos. Estamos frente a las amenazas a la democracia, los asesinatos a líderes sociales, las masacres, toda la historia de victimización que tenemos en Colombia, de una violencia que es antidemocrática porque es favorable para la concentración de poder y es adversa a la distribución del mismo. Nuestra sociedad impulsa poco la democracia. Por supuesto que hay una masa crítica de organizaciones y de víctimas que se movilizan frente a muchísimas cosas y lo hacen de manera activa, pero eso generalmente no logra alcanzar a las mayorías, aunque afortunadamente ha logrado alcanzar legitimidad. Eso es lo que pasa cuando la plaza de Bolívar está llena de gente exigiendo la paz, no es comparable con respecto a los siete, seis u ocho millones de bogotanos, pero es una expresión plenamente legítima.

Se trata de que la sociedad reivindique la posibilidad de que exista la democracia contra esas expresiones nocivas y que, además, las comprenda como tales. Que no simplemente se conmueva y, con esto, que no simplemente exista un CMPR que hace rituales públicos de conmemoración. No se trata de que la sociedad rechace en abstracto y diga que esas cosas están mal o, mucho peor, que las justifique repitiendo que esas cosas debieron haber pasado porque quienes las sufrieron lo merecían, que es lo que pasa un poco en nuestra historia. Entonces, lograr formar una sociedad así creo que es muy difícil, es un trabajo muy duro y es un trabajo que no hacen conscientemente todas las instituciones que deberían. Afortunadamente, creo que existe el CMPR para ello.

A. D.: Yo tengo una pregunta aquí, respecto a algo que reitera bastante: el trabajo de la construcción de la memoria histórica. Dada la importancia que esta labor tiene, que construye el presente y edifica las perspectivas del futuro, ¿qué tan importante es el cuidado hay que tener en un ejercicio como el del CMPR respecto a discursos nocivos que pueden cristalizar en la memoria histórica algo contrario a lo que se esperaría de una institución como esta?

J. A.: Creo que no se trata de convertir los organismos como el CMPR en instituciones que batallan contra lo que consideramos son versiones hegemónicas de la historia oficial. Es decir, el diagnóstico que yo creo que hay que hacer no es que en Colombia hay un discurso hegemónico unificado desde el poder, que sí que lo hay y se expresa desde los medios de comunicación y e instituciones que narran y cuentan la historia del conflicto de una manera que invisibiliza las voces de las víctimas, porque entonces las instituciones democratizadoras lo que hacen es

oponer una visión frente a eso, dicen: “no, al contrario, no es lo que usted dice, es lo que digo yo”. Creo que las instituciones nuestras no están para temerle al debate democrático sobre la historia.

Ustedes mencionaban ahora que *Ciudad Paz-andó* es una revista científica que reivindica el valor de la realidad factual, lo que no puede ser negado porque es producto de la investigación y, en ese sentido, produce la verdad. Entonces, para decirlo en estos términos, en los últimos años se ha dicho que en Colombia no hay conflicto armado interno, sino que simplemente hay una amenaza terrorista, y sobre esto no hay que tenerle miedo en decir: vamos abrir el debate democrático acerca de qué fue lo que pasó en la historia reciente del país. No simplemente oponer una versión que diga “no, sí existió un conflicto político, social y armado en el que el Estado es responsable”. Vamos a abrir el debate democrático, pero al abrirlo vamos a vincularlo con las verdades factuales, las verdades que dicen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las verdades que dicen las Altas Cortes, las verdades que están en los archivos de investigación de las organizaciones sociales, las verdades que están en el proceso de investigación que ahora está realizando la Comisión de la verdad o las verdades que fueron descubiertas por el CNMH. En esa realidad factual de ninguna manera va a ser sostenible que en Colombia ha existido una amenaza terrorista simplemente.

Además, cuando las demás personas se involucren con el debate, más allá de observar cómo una institución pelea contra otra, van a apropiarse de su experiencia histórica y comprender su propio lugar. Van a comprender su propio sitio frente a los asesinatos, las masacres y las desapariciones que continúan. La gente no simplemente va a esperar que nuestras instituciones produzcan la versión correcta. Entonces, por supuesto que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con respecto a usar bien las metodologías de investigación en los trabajos de memoria y hay que tener cuidado con respecto a saber cómo se hacen las actividades, los procesos, etc.

Ahora, también es verdad que en este momento fuerte cualquier afirmación puede ser fácilmente calificada como peligrosa, y a mí esa parte me parece que no está bien. Nos atrevemos a pensar en si una masacre es una masacre si o debería ser llamada de otra manera, si un acontecimiento tiene el nombre que normalmente ha tenido. A mí me parece que esa clase de cuestionamientos, cuando se hacen bien, cuando se hacen rigurosa y honestamente, no tienen por qué ser considerados o calificados como peligrosos. Creo que en nuestra sociedad hay una tendencia a calificar cualquier posibilidad disruptiva como algo que de entrada debemos evitar porque legitima el bando contrario: “¡cuidado con lo que estás diciendo porque estás dándole motivos al otro!”. Una lógica de polarización que creo que es negativa. El CMPR y las otras tantas instituciones dedicadas a la memoria son espacios

para el debate y la creación, en nuestras instituciones no se le puede temer al cuestionamiento.

A. H.: Sobre organismos generadores de construcción de memoria, como la Comisión de la verdad, que tiene que entregar un informe, digámoslo, un informe del conflicto armado, de la verdad de lo ocurrido, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta ahora la construcción de la memoria con esto que está pasando en el país? Porque mire a dónde estamos regresando en el tiempo. Si usted se da cuenta, cuando firmamos los Acuerdos estábamos dialogando en medio de las balas, en medio del ruido de los fusiles y la confrontación. Aquí estamos construyendo memoria otra vez en medio de un conflicto, de unos vejámenes que deja la guerra que nos hacen daño a todos.

J. A.: Bueno, hay un desafío viejo, ese desafío que persiste: la negación de las violaciones a los derechos humanos. Mejor dicho, la negación de los crímenes que han ocurrido en el marco del conflicto armado interno. Hay un desafío en ese sentido porque la ejecución de las violaciones a los derechos humanos lleva incorporada la pretensión de que no se conozcan ni se reflexione sobre sus magnitudes ni sus responsables. Por supuesto, en ese sentido creo que es muy valioso lo que hace la Comisión de la verdad, pero creo que en Colombia estamos en el reto de saber cómo se puede construir memoria de tal manera que, tanto en el método de investigación como en el método de explicación, no produzcamos lo que no queremos producir: acción con daño, que las víctimas se sientan utilizadas, que las expresiones de esas memorias signifiquen que cuando la gente las vea las considere irrelevantes o las considere relevantes. Lo importante es que las considere lecciones de pacificación.

Por otro lado, creo que un reto muy importante es ciertamente el de la polarización. Hay gente que en Colombia dice que no existe, sino que simplemente hay exacerbación de discursos de la extrema derecha. Yo creo que hay exacerbación de discursos de la extrema derecha y que eso no excluye el hecho de la polarización. Cuando me refiero a la polarización, no me refiero simplemente al cambio de este discurso de: “hay posiciones de extrema derecha, hay posiciones de extrema izquierda, entonces, lo que hay que tener es una posición de centro”. Eso no lo comparto mucho y creo que la visión sobre la polarización que nos preocupa es que, efectivamente, cada vez hay más dificultades para que posiciones distintas en la sociedad dialoguen entre ellas y no se considere que el cuestionamiento que trae una visión a tus pre-supuestos es un cuestionamiento moral o es un cuestionamiento que debe ser respondido como un rechazo moral con una descalificación plena.

Creo que la polarización se está convirtiendo en un problema muy serio en nuestra sociedad, lo es a nivel cotidiano y lo es a nivel de la memoria histórica, porque

quienes defienden que en Colombia no hubo conflicto armado interno y quienes, en cambio, defienden que aquí hubo un genocidio contra las comunidades agenciado por el paramilitarismo, no están teniendo ningún diálogo. Uno podría decir: “ah, pero es que no se puede hablar absolutamente nada con alguien que defiende una posición tan absurda”, y sí, es muy difícil hacerlo, pero también es cierto que esas “opiniones absurdas” que circulan a través de las redes sociales o de los medios de comunicación están conformando bloques en la sociedad. La gente no es capaz de hablar sobre la experiencia lógica que nos pertenece a todos.

Toda la sociedad tendría que ser capaz de poderse ver en la experiencia histórica que hemos tenido, no hay otra forma de evolucionar como seres humanos y sociedad si no es siendo capaces de observar la experiencia histórica, incluso para saber que la queremos negar y que no queremos volver a saber nada de ella, pero para saber que se está ahí. Me parece que eso realmente es un reto muy fuerte e importante.

Hay otro reto y es que es muy difícil trabajar el tema de memoria y explicar la importancia que tiene este tema para personas y comunidades que no ven en esta cuestión un avance favorable a sus necesidades vitales más fuertes, más urgentes, más sentidas. Entonces, tú quieres trabajar memoria en un barrio popular, ello es muy importante, pero no por tu trabajo, es muy importante para la reconstrucción del tejido social, para la reivindicación identitaria, para mil cosas, y probablemente muchas de esas comunidades tienen para responderte que la memoria no da de comer. Bueno, yo creo que esos son algunos de los retos, ¿no?, pero hay más, hay muchísimos.

A. D.: José, ya prácticamente vamos cerrando, pero no podemos concluir sin preguntar algo acerca de lo más reciente que ha ocurrido, y creo que se conecta justo con lo que mencionaba de lo difícil que es tomar posición frente a la experiencia histórica: ¿qué opina sobre lo que ha pasado con los monumentos al soldado en Palmira o lo que pasó en Popayán con la estatua de Sebastián Belalcázar?

J. A.: Yo pienso que en lo que se refiere a tomar posición sobre la experiencia histórica no hay prácticamente ningún debate. Es decir, solo hay debate en la medida en que nos movamos en la superficie de la polémica más burda, ¿no?, pero cuando le metemos un poco de conocimiento histórico yo creo que no hay debate. La estatua de Sebastián de Belalcázar la ubicaron en uno de los cerros sagrados de las comunidades indígenas de Nariño y por supuesto que lo que hicieron fue absolutamente violento con esas comunidades. Sebastián de Belalcázar no puede ser considerado simplemente el “fundador” de una ciudad cuando todos sabemos que tiene el prontuario que tiene, un prontuario que incluso fue reconocido en España cuando fue juzgado como criminal antes de que termi-

nara muriendo aquí.

Efectivamente este asunto tiene que ver con la forma, y el asunto de la forma también es que lo ideal sería que el Estado colombiano, incluyendo sus autoridades municipales y territoriales, comprendiese que la cuestión de la memoria es parte integrante de la democracia y los derechos humanos. Si eso fuese así, como país podríamos avanzar al saber que todos los territorios en el país, todos los mapas, las cartografías de nuestras ciudades están llenas de tergiversaciones, de cosas que ofenden, que son marcaciones impositivas en el espacio público, de poder, de dominación. Eso tendría que cambiar en virtud de la política de derechos humanos.

Así como la política de derechos humanos propende a la eliminación de la esclavitud, de la tortura, de la explotación sexual, tendría que eliminar la imposición violenta en el espacio público, de marcas simbólicas que son favorables a esa violación de derechos. Eso tendría que ser así en todos los territorios y debería implicar que hubiese discusiones para hacer cosas creativas en el marco de políticas de memoria: quitar un monumento de un lugar ponerlo en otro, acompañarlo de otro, eventualmente quitar uno de un lugar definitivamente y no poner nada en ese lugar. Hay todas las posibilidades que ustedes quieran. No obstante, eso no es así, en Bogotá, donde existe un poco de esa política de memoria, digo un poco en el sentido de que tampoco es que haya una plenitud absoluta para que muchos de los lugares que deberían ser reconocidos en esta ciudad como lugares de memoria sociales o que, en cambio, son lugares de memoria, se transformen desde ya, pero bueno, hay una voluntad administrativa política para eso.

Aquí han pasado cosas que pueden ser interesantes, que son diferentes, y también hemos fracasado en muchas de otras. Alguna vez se intentaba, por ejemplo, que la placa que hay en el Palacio de Justicia que dice “aquí murieron personas porque un comando del M-19 lo asaltó financiado por Pablo Escobar”, o se quitara o se cambiara por una placa que las víctimas pedían que se construyera, la cual decía: “las víctimas del palacio de justicia por desaparición forzada no fueron por culpa de Plazas Vega”. De hecho, esa placa existió, el CMPR la mandó a hacer en el momento en que Plazas Vega estaba aun con su condena vigente, luego cuando le meten una sentencia absolutoria, él demandó la existencia de esa placa y la tuvieron que quitar del Palacio de Liévano.

Así, por ejemplo, Ati Quigua planteaba hace mucho tiempo que se cambiara el nombre de la Avenida Jiménez porque alude a Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahora, cuando eso está totalmente lejos de posibilidades de discusión, como departamento o ciudad en Nariño, el Cauca o Popayán, están estas reacciones de extrema derecha, cartas que dicen que vamos a reivindicar la herencia hispánica de Sebastián de Belalcázar. Pues evidentemente se producen esa clase de hechos y ahí hay una correlación de fuerzas de poder. Ahí sí te lo digo como analista, más

que según mis pretensiones, pues siguen el curso de las relaciones de poder. Es decir, en la medida que hay un Gobierno que defiende esa herencia, el Gobierno utiliza sus mecanismos y sus métodos para judicializar, castigar o perseguir a las personas que hicieron esto, y eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo y creo que tendría que ser de una manera totalmente diferente, pero es lo que pasa. Además, no creo que de ninguna manera los indígenas que tumbaron la estatua de Belalcázar hayan pretendido que no iban a recibir sanciones y consecuencias, pero lo hicieron sabiendo que iban a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos, esa es la forma del funcionar del movimiento indígena.

En resumen, en Colombia tendría que haber una política de memoria amplia nacional, garantista de los derechos humanos, que implicará cambiar plenamente el espacio, sus marcas, sus determinaciones. En Bogotá hay avances en ese sentido, no tantos como quisiéramos, pero los hay. No obstante, en otros lugares hay cero avances y allí es donde se está viendo, por ejemplo, esa clase de actos. Yo no los juzgo porque son violentos o no, me parece mucho más violento haberle impuesto al movimiento, al pueblo indígena y a todo el país la estatua de un genocida en un morro que también es un monumento sagrado de los indígenas y creo que es un asunto que, para resolverse, tendría que inclinarse a favor de causas democráticas.

A. H.: José, muchísimas gracias. Han pasado 45 minutos y bueno, lo felicito de parte del IPAZUD porque hemos visto que se han movido totalmente a pesar de la virtua-

lidad. Siempre vemos actividades por parte del CMPR, conversatorios, gente de fuera explorando y discutiendo, como usted dice, a través del diálogo. Para finalizar, quería hacerle una última pregunta, ¿cuál es el mensaje que deja José respecto a la memoria histórica?

J. A.: Bueno, lo primero es que la memoria, por más que nos han dicho que es un deber del Estado y, en ese sentido, casi que depende de la voluntad de las instituciones, realmente es un derecho, es un derecho de la sociedad, no solamente de las víctimas. Conocer, reconocer, discutir y dialogar entorno a la experiencia histórica, y más en nuestra experiencia histórica que está atravesada por violencia, tenemos que reivindicar ese derecho desde la juventud, lo tenemos que hacer desde la universidad y tenemos que hacerlo, no para regodearnos o para complacernos en nuestra tragedia, comparándonos con otros países diciendo que nuestra tragedia es mayor o menor, sino para tener fundamentos históricos con los cuales continuar trabajando por la democratización real de nuestra sociedad, que al fin de cuentas es la realización de la paz.

